



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-001-2021-00105-01
Demandante: Beatriz Elena Palacio Ochoa
Demandado: Colpensiones E.I.C.E y Protección S.A.
Asunto: Apelación y Consulta
Procedencia: Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, abril veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Colpensiones E.I.C.E, así como el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la entidad pública, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 1° de febrero de 2023, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora BEATRIZ ELENA PALACIO OCHOA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A, Radicado 05001-31-05-001-2021-00105-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora BEATRIZ ELENA PALACIO OCHOA, convocó a juicio ordinario laboral a COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A pretendiendo se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en consecuencia, se ordene a Protección S.A., trasladar a Colpensiones el valor de los aportes recibidos, esto es, cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, cuotas de administración y demás conceptos que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, igualmente, se ordene a Colpensiones a recibirla en el Régimen de Prima Media, sin solución de continuidad y se condene a Protección S.A., al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales.

Como fundamento de tales suplicas, se narró que la señora Beatriz Elena Palacio Ochoa efectuó aportes al ISS desde noviembre de 1988, que el 1º de febrero de 2015 se trasladó de régimen, afiliándose a Protección S.A., anotando que previo a dicha afiliación, el asesor de Protección S.A., le informó que podría pensionarse con una mesada mayor a la que le correspondería en el Régimen de Prima Media y que podría pensionarse más rápido, omitiendo indicarle que la liquidación en cada uno de los regímenes es muy diferente y sin explicarle las características específicas de cada administradora pensional, por lo que la decisión de traslado no fue espontánea, ni voluntaria, ni libre, incumpléndose con el deber de información.

1.2.- CONTESTACIÓN

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado, **COLPENSIONES**, dio respuesta a la demanda, aceptando como cierto que la actora efectuó aportes al ISS desde el 1 de diciembre de 1988, señalando no constarle los demás hechos, por ser ajenos a la entidad y en tal sentido, se desconoce los pormenores de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los mismos.

En su defensa, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia del traslado de régimen; inexistencia de ineficacia del traslado; inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP Protección S.A. ante Colpensiones en casos de ineficacia del traslado de régimen; indebida aplicación del artículo 1604 del Código Civil; desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el régimen de prima media; desconocimiento del precedente judicial; equivalencia del ahorro o diferencias pensionales; devolución de aportes debidamente indexados; devolución de cuotas de administración debidamente indexadas por parte de la AFP Protección S.A; devolución de aportes debidamente discriminados; buena fe; prescripción; compensación; la genérica o innominada; imposibilidad de condena en costas.

Por su parte, **PROTECCIÓN S.A.** manifestó que no le constan las cotizaciones que hubiera efectuado la demandante al ISS y que no es cierto lo relativo a la afiliación de la accionante a dicha administradora, pues la misma recibió información clara, correcta, adecuada y suficiente sobre el funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual y las implicaciones de la afiliación, resaltando que la misma se dio en estricto cumplimiento de los requisitos legales, siendo una decisión libre, voluntaria, espontánea y sin presiones.

Para enervar el éxito de las pretensiones propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; prescripción; buena fe;

inexistencia de afiliación previa al régimen de prima media; aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro provisional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta los derechos de terceros de buena fe e innominada o genérica.

1.3.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo proferido el 1° de febrero de 2023, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, declaró la ineficacia del traslado de la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el día 23 de diciembre de 2014, por falta al deber de información; ordenó a Colpensiones tener a la demandante válidamente afiliada al Régimen de Prima Premia con Prestación Definida y homologar las semanas cotizadas al RAIS, previo el recibo del correspondiente saldo de la cuenta de ahorro individual; ordenó a Protección S.A. trasladar en un término máximo de 30 días el saldo total existente en la cuenta de ahorro individual de la actora a Colpensiones, incluidos los porcentajes descontados para garantía de pensión mínima, cuotas de administración y seguros previsionales debidamente indexados desde la fecha en que se descontaron; declaró probada oficiosamente la excepción de falta de causa para pedir, solo frente a los perjuicios reclamados y no probadas las demás excepciones; finalmente, condenó en costas a Protección S.A.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Colpensiones E.I.C.E

Interpone recurso de apelación, solicitando se adicione el fallo proferido, en el sentido que establecer que al momento de cumplirse la orden impartida, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado del IBC, aportes y demás información relevante que los justifique tal y cómo lo ordenó la Corte en sentencia de radicación SL4803-2021 y sentencia SL3710-2021.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado de Colpensiones solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, bajo el entendido que la demandante no se encuentra en el período oportuno para solicitar el traslado de régimen al encontrarse dentro de los 10 años para acceder a la pensión, llamando la atención sobre el impacto monetario que acarrea el traslado de régimen, sin que la disparidad en cifras en el monto de la pensión, sea habilitante para que prospere una demanda de ineficacia. Finalmente, solicita que, en caso de confirmarse la sentencia, se adicione lo solicitado en el recurso de alzada.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora Beatriz Elena Palacio Ochoa, nació el 24 de abril de 1970, tal y cómo se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante en el anexo 05 de la carpeta 01 del expediente digital
- Que la actora se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con la Solidaridad, a través de Protección S.A., el día 23 de diciembre de 2014, con fecha de efectividad 1º de febrero de 2015, de conformidad con el registro digital y el certificado SIAPF, obrantes a folios 41 y 45 respectivamente, del anexo 02 de la carpeta 10 del expediente digital.
- Que la accionante acredita un total de 1019.14 semanas cotizadas, de acuerdo con la historia laboral generada por Protección S.A., glosada a folios 47 a 59 del anexo 02 de la carpeta 10 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta, proferida en el presente proceso por la señora Juez Primera Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si es ineficaz el traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuado el día 23 de diciembre de 1994 a través de la AFP Protección S.A.?

¿Si como consecuencia de la ineficacia declarada, debe ordenarse a Protección S.A., que, al momento de cumplirse las ordenes impuestas, informe de manera discriminada los valores trasladados, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, como lo solicita el apoderado de Colpensiones?

2.4.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual es ineficaz el acto de afiliación por incumplimiento del deber de información por parte de Protección S.A., por lo tanto, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante a Colpensiones, incluyendo las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y los descuentos por seguros previsionales, estos tres últimos debidamente indexados, sin que sea requiera ordenar la discriminación del valor de los aportes junto con el detalle pormenorizado del IBC y demás información relevante, pues ello es consustancial a la orden de traslado; en consecuencia se CONFIRMARÁ la sentencia proferida en primera instancia.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

A su vez, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el*

derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información

objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021 y más recientemente en las sentencias SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022 y SL1637 del 11 de mayo de 2022, SL113 del 31 de enero de 2023, SL178 del 07 de febrero de 2023, SL397 del 01 de marzo de 2023, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se establece que la señora Beatriz Elena Palacio Ochoa se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de Protección S.A., el día 23 de diciembre de 2014, con fecha de efectividad 1° de febrero de 2015, de conformidad con el certificado SIAPF, obrante a folios 45 del anexo 02 de la carpeta 10 del expediente digital, no obrando en el expediente copia del formulario de la afiliación de la actora.

Del interrogatorio de parte practicado a la demandante, no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma sostuvo que se afilió a protección S.A., sin tener conocimiento de los beneficios de uno u otro régimen, que no se le dio información, que solo recibió el formulario de afiliación y lo firmó, afirmado que no le hablaron de la cuenta de ahorro individual, ni de descuentos por gastos de administración, que tampoco le hablaron del bono pensional, ni de la devolución de saldos.

Se sigue de lo anterior, que la afiliación de la actora al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con la cual tuvo lugar el cambio de régimen pensional, se efectuó sin que la misma hubiera recibido información completa y adecuada, esto es, sin conocer las características, funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, consecuencias del traslado, ni las desventajas que podría traerle dicho régimen pensional, conforme a las exigencias legales vigentes para la fecha del traslado.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, que desvirtúe lo afirmado por el accionante, a partir del cual pueda establecerse que en su momento la AFP Protección S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó inicialmente, la AFP Protección S.A., a la demandante, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, sin que sea imposibilidad para ello que la accionante se encuentre inmersa en la prohibición contemplada en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, como lo refiere el apoderado de Colpensiones en sus alegatos, en tanto que, el retorno de la misma al Régimen de Prima Media se da como consecuencia de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Sobre los efectos de la ineficacia

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de las administradoras accionadas, teniendo en cuenta, que fue la AFP Protección S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información, y siendo la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto, no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL2877 del 29 de julio de 2020 y SL 3034 de 2021, última en la cual sobre el punto se indicó:

“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la

declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.

Sobre la indexación

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones.

Colofón de lo anterior, la orden de traslado impuesta por el a quo, se encuentra ajustada a los anteriores criterios, imponiéndose la confirmación íntegra del fallo.

Finalmente, atendiendo el recurso presentado por el apoderado de Colpensiones, encuentra la Sala improcedente adicionar la sentencia, a fin de que Protección S.A., al momento de cumplir las órdenes impartidas en el presente trámite, discriminen los conceptos trasladados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, resaltando la Sala que ello es inherente a la orden de traslado sin que sea necesario que en el fallo se

especifique tal aspecto o que los jueces adopten formulas predeterminadas, pues, en todo caso, la AFP debe trasladar la totalidad de los aportes con sustento en la historia laboral de la demandante.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E., y en favor de la demandante, se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 que corresponde un (1) SMLMV.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESOLVE


1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 1° de febrero del año en curso, en el proceso ordinario instaurado por la señora BEATRIZ ELENA PALACIO OCHOA en contra de la AMDMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E. y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

2.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E., se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000

Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.


Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO